

ACCIÓN URGENTE

CONDENAS TRAS UN JUICIO POSIBLEMENTE INJUSTO

Veintiuna personas de entre las que fueron detenidas durante las protestas antigubernamentales en Quito, la capital de Ecuador, han sido condenadas tras procesos en los que se teme que se haya violado su derecho a un juicio justo. Durante las protestas, Amnistía Internacional recibió información sobre uso excesivo de la fuerza y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, así como sobre detenciones arbitrarias.

El 3 de diciembre se celebraron en Quito manifestaciones para protestar contra una serie de propuestas de reforma constitucional. Decenas de personas, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas, y 32 fueron detenidas en una situación en la que, según se teme, la policía hizo uso de fuerza excesiva y detuvo arbitrariamente a manifestantes y transeúntes. Mientras la Asamblea Nacional de Ecuador aprobaba las controvertidas reformas constitucionales, hacia las seis de la tarde, estallaron enfrentamientos entre policías y manifestantes. El Ministerio del Interior informó de que 13 policías habían resultado heridos tras ser golpeados con palos y piedras.

Según la información proporcionada por una organización de derechos humanos, 32 personas fueron detenidas por la policía y permanecen bajo custodia. La mayoría de ellas aseguran que no estaban participando en las protestas, y que fueron detenidas cuando se dirigían a sus casas. Las personas detenidas han denunciado que, mientras estuvieron bajo custodia policial, se les negó el acceso a un abogado hasta que comparecieron ante la fiscalía.

El 4 de diciembre, 21 de las personas detenidas fueron condenadas a 15 días de prisión y a una multa de 200 dólares estadounidenses. Se teme que no hayan tenido un juicio justo y que hayan sido procesadas pese a que no existían pruebas creíbles contra ellas. Según las ONG de derechos humanos que representan a las personas detenidas, la fiscalía no presentó prueba alguna que demostrara, más allá de una duda razonable, la responsabilidad individual de ninguno de los acusados. La mayoría eran transeúntes, y ninguno fue identificado por los policías como sus agresores.

Escriban inmediatamente, en español, en inglés o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que pongan en libertad a las 21 personas, a menos que sean juzgadas en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos;
- reconociendo que, aunque el Estado tiene el deber de mantener el orden público, nunca debe hacer uso de fuerza excesiva, y debe garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho a un juicio justo;
- pidiendo que se lleven a cabo investigaciones inmediatas e imparciales sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detención arbitraria, y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE ENERO DE 2016 A:

Presidente de Ecuador

Rafael Correa Delgado

Presidente de la República

García Moreno N10-43 entre Chile y

Espejo, Quito, Pichincha, Ecuador

Twitter: @MashiRafael

Tratamiento: Señor Presidente

Ministra de Justicia

Dra. Ledy Zúñiga Rocha

Ministra de Justicia, Derechos humanos

y Cultos

Av. Colón entre Diego de Almagro y

Reina Victoria. Edif Torres de Almagro.

Quito, Ecuador

Tratamiento: Señora Ministra

Y copias a:

Organización local de derechos

humanos

Comisión Ecuaménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto

Edificio Yuraj Pirca Piso 9

Quito, Ecuador

Correo-e: cedhu@cedhu.org

Envíen también copias a la representación diplomática de Ecuador acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Fax Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**



ACCIÓN URGENTE

CONDENAS TRAS UN JUICIO POSIBLEMENTE INJUSTO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 3 de diciembre, la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de 15 reformas constitucionales propuestas por el ejecutivo, que incluían autorizar el uso del ejército para responder a situaciones de seguridad pública interna, y permitir la reelección indefinida del presidente y otras autoridades.

En el pasado Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por las iniciativas de las autoridades ecuatorianas para reprimir las protestas antigubernamentales haciendo un uso excesivo de la fuerza, y por su utilización de procedimientos penales infundados contra quienes expresan críticas contra las políticas gubernamentales, puesto que parecen ser un intento deliberado de restringir el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

En agosto se produjeron en todo el país manifestaciones encabezadas por sindicatos, organizaciones de pueblos indígenas y grupos de la sociedad civil en protesta contra una serie de políticas gubernamentales, entre ellas las relativas al uso de recursos nacionales, el Tratado de Libre Comercio acordado con la Unión Europea, y las reformas constitucionales propuestas. Estas protestas se caracterizaron por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes y por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Para más información, véase: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/2312/2015/es/>.

Amnistía Internacional ha documentado casos de líderes indígenas y campesinos de Ecuador que se han enfrentado a cargos infundados, procesamiento penal, detenciones arbitrarias y rigurosas condiciones de fianza en un intento de desanimarlos de manifestar su oposición y protestar contra las leyes y políticas gubernamentales (véase el informe: *"Para que nadie reclame nada". ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?*, <https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/002/2012/es/>).

Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene el deber de detener a los sospechosos y de mantener la seguridad y el orden públicos. Sin embargo, las fuerzas de seguridad sólo deben recurrir a la fuerza cuando sea estrictamente necesaria, y siempre de forma proporcionada y con una finalidad legítima. La violencia de algunos manifestantes no debe utilizarse para reprimir el derecho a la manifestación pacífica de la mayoría, y las autoridades deben garantizar que quienes protestan de forma pacífica pueden continuar haciéndolo y no son objeto de detenciones arbitrarias o juicios injustos.

Nombre: Manifestantes en Quito, Ecuador

Sexo: hombres y mujeres

AU: 285/15 Índice: AMR 28/3054/2015 Fecha de emisión: 11 de diciembre de 2015